

EDITORIALES

Exigencia española

Los reproches de la UE hacia nuestras reformas y ajustes no pueden acallar las demandas a Bruselas, al BCE y a Alemania

El Gobierno Rajoy parece haber decidido, esta última semana, alzar la voz ante Bruselas al reclamar el propio presidente que el BCE actúe como lo hacen las demás autoridades monetarias, al resistirse Montoro a asumir las recomendaciones para un incremento de la presión fiscal en España, y al demandar De Guindos un examen autocrítico por parte de la UE sobre las políticas aplicadas hasta el momento que mantienen a Europa en recesión mientras las demás potencias crecen. Claro que tales mensajes han sido dirigidos al público español, sin que se conozca por ahora el eco obtenido entre los socios europeos y en las instituciones comunitarias. Pero de todas las disconformidades expuestas en los últimos días hay una que adquiere rango de reclamación y exige respuesta inmediata: la queja, enunciada primero por el presidente Rajoy y argumentada ayer con vehemencia por su ministro de Economía, del desigual trato financiero que soportan las empresas españolas más solventes respecto a sus homólogas de los demás países del euro. Luis de Guindos llegó a afirmar que está «roto el mecanismo de transmisión de la política monetaria», desde el momento en que las compañías radicadas en nuestro país están «pagando un diferencial de tipos de interés» que las perjudica respecto a sus competidoras. El titular de Economía reiteró ayer el cuadro de medidas a adoptar con objeto de superar una realidad tan lesiva para los intereses españoles y afianzar la unión bancaria: el supervisor único, la recapitalización directa de las entidades en dificultades y el establecimiento de un mecanismo integrado de resolución de cuantas situaciones críticas puedan darse en el ámbito financiero. Pero es de temer que nuevamente lo urgente se imponga a lo importante, y la moratoria a los préstamos concedidos a Irlanda y Portugal, junto a la ratificación del rescate sobre Chipre, agote por el momento las energías comunitarias. Todo dependerá de que la voz crítica del Gobierno Rajoy se haga sentir en Europa, sin que los reproches de la Unión hacia las insuficiencias y tardanzas de las reformas y ajustes dictados a nuestro país sean utilizadas para desautorizar la verdad que encierran las advertencias y propuestas que por fin esta semana han expuesto el presidente y De Guindos respecto a Bruselas. Porque hace falta que la Comisión, el BCE y Alemania se den por enteradas.

Inquietudes venezolanas

Más allá de su resultado –la victoria del chavista Maduro o del liberal Capriles–, la elección presidencial de mañana en Venezuela toma una dimensión de inusitada importancia para el país. Tiene algo de referéndum sobre el largo liderazgo del desaparecido presidente Chávez y presenta fuertes indicios de incompatibilidad entre partidos y sectores sociales. Aunque la institucionalidad disponible fue siempre ratificada con los votos, la vigente Constitución no es un modelo de voluntad integradora y no fue redactada desde un consenso básico para atenuar la polarización social y política. La campaña electoral, llena de descalificaciones, insultos y algunos brotes de violencia, ha exacerbado un poco más los sentimientos y agudizado las aprensiones. Así, y sea quien sea, el presidente elegido y su nuevo Gobierno harían bien en apaciguar los ánimos, tender puentes a la oposición y fomentar el diálogo nacional con altura de miras y en un tono reconciliador. El chavismo sin Chávez, además, lo aconseja en términos puramente prácticos: nada podrá ser igual y lo deseable es intentar que todo sea un poco mejor.

SUR

Edita: Prensa Malagueña S.A. Director General José Luis Romero

Director

Manuel Castillo

Director de Publicaciones Pedro Luis Gómez

Subdirector

Javier Recio Villalobos

Adjunto a la Dirección (Economía)

José Vicente Astorga

Mesa de Redacción

Elena de Miguel

(JEFA DE INFORMACIÓN),

José Miguel Aguilar

(JEFE DE EDICIÓN),

Luis Moret (MULTIMEDIA),

Ana Barreales (INTERNET),

Antonio Ortín (MÁLAGA),

María Eugenia Merelo

(CULTURAS Y SOCIEDAD),

Juan Antonio Morgado

(DEPORTES),

Héctor Barbotta

(MARBELLA),

Fran Ruano (ARTE Y DISEÑO)

Director de Control de Gestión

Hugo Ferré

Director de Marketing

Joaquín Cestino

Director Técnico

Fernando de Gálvez

Publicidad

CMSUR S. L.

Director Comercial

Jorge Artero

LA TRIBUNA

Los deberes en serio

ALBERTO RUIZ OJEDA

PROFESOR TITULAR DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Las estrategias de acción colectiva basadas en la socialización de pérdidas tienen en común la búsqueda de instrumentos coactivos, de herramientas gubernativas para cambiar las reglas del juego



Los intelectuales de izquierda, como es el caso de R. Dworking, llenaron de contenido, muchas veces bueno, el discurso sentsaiochista de los derechos civiles, de la reivindicación frente a los estamentos anclados en privilegios y pautas morales desfasadas. Una insistencia tan vehemente en los derechos, en el albedrío espontáneo del ser humano conlleva el riesgo de dejar vacía la libertad y, con ella, al propio hombre y a sus soportes sociales. Puede que una de las paradojas más llamativas del siglo pasado sea que hubiese empezado con el triunfo de los colectivismos y haya terminado con la sacralización del más feroz individualismo. A mi parecer, ambos extremos son sólo formas distintas de nihilismo antropológico y, por tanto, político y jurídico. Un socialista fabiano, Bernard Shaw, señaló con convicción que la libertad es odiada porque significa responsabilidad. Y responsabilidad quiere decir responder a alguien o ante alguien y, en definitiva, tener ataduras, o sea, deberes, innatos o adquiridos, como los derechos. Un ordenamiento en el que sólo hay derechos es el vacío jurídico absoluto, y a él parece que podríamos ir.

Sobre estas bases, el progreso consistiría en la ilimitada fabricación de derechos, de manera que el avance se detiene cuando tal producción se ve amenazada o cuando los derechos conquistados no gozan de un estatuto similar, por no decir superior, al de los derechos preexistentes y con los que expresamente rivalizan. El progreso así concebido consistiría en una especie de guerra sin cuartel entre derechos, en la que, literalmente, los nuevos canibalizan a los anteriores hasta su extinción, en una voraz e imparable sucesión de generaciones de derechos, que abominan de las anteriores.

Esta carrera hacia ningún sitio tiene vertientes muy variadas. Es una obviedad decir que el grueso del colectivo antidesahucios está formado por las principales víctimas de la crisis económica y, si no ando muy equivocado, por aquellos que firmaron hipotecas cuando los bancos las daban porque pensaban que sus deudores las iban a poder pagar, es más, incluso éstos lo pensaban. Seguro que recuerdan aquellos trabajadores de la construcción que, junto con toda la cuadrilla (es una palabra técnica), abandonaban una obra en curso súbitamente y sin decir una palabra al patrón para

ponerse a trabajar en otra por la comprensible razón de que les pagaban más. Eran unos linceles del denostado mercado de trabajo y ganaban más que el bancario que les daba la hipoteca, les financiaba el coche o les daba de prestado para veranear en la playa. Eres lo que debes, y tu nivel de vida muerde el polvo cuando no puedes pagar tus deudas. Ahora que las cosas están tan tiesas, los desheredados de la tierra braman contra los que les dieron dinero, el capitalismo de cuyos excedentes se beneficiaron y los empresarios a los que tantas veces hicieron la peineta para vender su fuerza de trabajo a otros. No es el huevo, es el fuero, no es la desgracia, es la actitud ante ella, porque en la adversidad –no en el éxito– cada ser humano muestra su más profunda catadura.

Las estrategias de acción colectiva basadas en la socialización de pérdidas tienen en común la búsqueda

de instrumentos coactivos, es decir, de herramientas gubernativas o legislativas dirigidas a cambiar durante la partida las reglas del juego. Para evitar que el banco nos desahucie, en cumplimiento de un contrato de préstamo hipotecario que nadie nos obligó a firmar, podemos hacer varias cosas, entre ellas representar el papel de mártires del sistema y exigir a los políticos que, por diferentes vías, modifiquen a nuestro favor el contrato que firmamos. Si elegimos esto último, es posible que los políticos nos hagan caso, pero entonces serán otros los que tengan que soportar las pérdidas que pretendemos eludir. Aquí se abre una serie en cadena de efectos entre los que destacaría tres: que los depositantes de los bancos acreedores vean mermado el valor y la retribución

de sus depósitos, que los deudores hipotecarios futuros de esos mismos bancos accedan a la vivienda en condiciones más gravosas y que, al incrementarse el coste del acceso a la propiedad, los propietarios exijan unos alquileres más altos.

Entrar en el juego político nunca sale gratis, ni siquiera para los que, en el corto plazo, se beneficiarían de él. Los políticos suelen explotar con maestría la vacuidad de quienes sólo quieren tener derechos y se ciscan en los que les exigen el cumplimiento de obligaciones voluntariamente adquiridas, y lo hacen mediante la transferencia de las pérdidas presentes a las generaciones futuras. Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Así se construye una democracia insostenible.

